

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta 279

Medellín, treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto en el proceso ordinario laboral promovido por los señores **OLGA PATRICIA SERNA OCAMPO** contra **PORVENIR S.A.**

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La demandante solicita que se reconozca y pague la pensión de sobrevivientes generada con ocasión del fallecimiento de su hijo, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y en subsidio, la indexación de las condenas.

Hechos

Como fundamento de sus pretensiones indica que, era la madre de Diego Alejandro Serna Ocampo.

En vida el hijo de la demandante laboraba en la minería del Municipio de Puerto Berrio.

Falleció el día 14 de diciembre del año 2020, para ese entonces se encontraba afiliado en Porvenir S.A., desde el mes de febrero del año 2011, acumulando hasta la fecha de su fallecimiento 117 semanas.

El núcleo familiar estaba compuesto por su madre, hermana y él, siendo el causante quien proveía todo lo necesario para el hogar,

Tanto la madre como su hermana María Juliana, dependían completamente de los aportes económicos Diego Alejandro, convirtiéndose esa dependencia en relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de su familia.

Con la muerte de su hijo, además del dolor y la depresión que le ha causado, le ha ocasionado una condición económica paupérrima, obligándose a recurrir a sus familiares para que le ayuden económicamente, teniendo en cuenta que por su avanzada edad no le es fácil conseguir empleo, razón por la cual le tocó seguir trabajando como aseadora, cocinera, y demás oficios varios en casas cercanas en la vereda.

El causante empezó con la construcción de la vivienda donde eran residentes los tres con la madre y hermana, con el dinero producto del trabajo que estaba realizando, destacando que la vivienda hasta la fecha no se ha terminado de construir por falta de sustento económico.

Conforme con lo expuesto, la actora cumple con los requisitos concomitantes para la configuración de la dependencia económica, es decir, carencia de ingresos y derivación de la subsistencia del causante, además cierta, constante.

Solicitó pensión de sobrevivientes el día 21 de mayo de 2021, la cual fue negada por Porvenir S.A., bajo el argumento que no acreditaba la calidad de beneficiaria, porque no acreditó la dependencia económica respecto de su hijo.

Contestación Porvenir S.A.

La AFP demandada a través de apoderada dio respuesta indicando que el causante era su afiliado y dejó causada la pensión de sobrevivientes, sin embargo, no se demostró por parte de su madre la condición de beneficiaria para acceder a la misma, toda vez que no dependía económicamente de aquel.

Radicado: 05360-31-05-001-2023-00129-01
Radicado Interno: P24223
Asunto: Confirma sentencia

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: Inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, compensación y afectación principio de sostenibilidad del sistema.

Sentencia de primera instancia

La Juez Primera Laboral del Circuito de Itagüí, en sentencia del **10 de agosto de 2023, condenó a Porvenir S.A.** a reconocer la pensión de sobrevivientes en los siguientes términos:

PRIMERO. SE CONDENA a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA a reconocer y pagar a la señora OLGA PATRICIA SERNA OCAMPO la pensión de sobreviviente causada por el fallecimiento de su hijo DIEGO ALEJANDRO SERNA OCAMPO, a partir del 14 de diciembre de 2020, en el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, a razón de 13 mesadas anuales y que liquidadas hasta el 31 de julio de 2023 arrojan la suma total de \$ 33.399.000, que deberá ser sufragado como retroactivo pensional.

A partir del 1 de agosto de 2023 la entidad accionada deberá continuar reconociendo a la accionante una mesada pensional equivalente al salario mínima para cada año sin perjuicio de los aumentos que disponga el Gobierno Nacional para ello. Se autoriza a la administradora a realizar los descuentos en salud a que haya lugar. Según se explicó en la parte motiva.

SEGUNDO. SE CONDENA a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA al reconocimiento y pago de intereses moratorios causados desde el 22 de julio de 2021, sobre el retroactivo pensional adeudado y de las mesadas que se sigan causando, liquidados a la tasa máxima de interés moratorio vigente al momento del pago, en los términos del artículo 141 de la ley 100 de 1993, tal como se dijo en las consideraciones.

TERCERO. SE DECLARA improbada la excepción de prescripción, las restantes quedaron implícitamente resueltas en la parte motiva de la providencia.

CUARTO. CONDENAR en costas a la parte vencida en juicio, esto es, a PORVENIR SA y a favor de la demandante.

Las Agencias en Derecho se calculan en \$1.669.950 pesos.

Esta decisión fue apelada por la apoderada de la AFP demandada en los siguientes términos generales:

Recurso de apelación Porvenir S.A.

El recurrente solicita que se **revoque** la decisión de primera instancia por cuanto a su juicio no se demostró que la madre del causante dependiera económicamente de este a la fecha de la muerte, como quedó plasmado en la investigación administrativa realizada por la entidad.

Lo anterior, en razón a que la actora contaba con ingresos propios de la actividad que realizaba arreglando uñas y aseo, por lo que no era importante la ayuda del hijo fallecido.

Además, pudo establecerse que el hijo no se encontraba conviviendo en la misma casa con la madre, entonces debía cubrir gastos a parte de arriendo, transporte y alimentación, no siendo posible brindar esa ayuda que se menciona.

Los testigos no conocen directamente las circunstancias de la familia, entonces no puede tenerse certeza sobre sus dichos y no sabían el monto que aportaba el causante a su madre.

En lo que refiere a los intereses moratorios, solicita que no le sean impuestos, puesto que, la negativa de la pensión se fundamentó en razones objetivas, ha actuado de buena fe y ajustada a derecho, argumentos que igualmente la exoneran de costas procesales.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado. TCC S.A.S., manifestó:

El fallo condenatorio emitido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín erró al considerar que la justa causa de terminación del contrato invocada por mi representada respecto del demandante no se encontró debidamente comprobada, lo cual es desacertado toda vez que el acervo probatorio arrimado al proceso da cuenta de que la misma se encontró soportada en la falta de seguimiento a los protocolos establecidos para su labor por parte del demandante, los cuales eran debidamente conocidos por este, tal y como se observa en la pruebas documentales. Igualmente, el fallador de instancia desconoció que a lo largo del debate probatorio quedó debidamente establecido que el demandante no supo soportar la parada no reportada a las 2:10am del 11 de febrero de 2017, pues tanto en la diligencia de ampliación de hechos realizados en el año 2017, como en el interrogatorio de parte realizado en el marco del proceso, presentó graves inconsistencias respecto de las razones de dicha parada y su ausencia de reporte de ella.

Así mismo no se tuvo en cuenta que mi representada evidenció dicha falla a través del sistema del OBC o computada que tenía asignado el vehículo, el cual era certero y rastreaba en tiempo real todos los movimientos del vehículo, lo cual constituía una prueba fehaciente e inequívoca de la existencia de la parada no reportada. El juzgado concluyó que dicha parada se debía a la fila del peaje de Oiba, no obstante, dicha conclusión es errónea pues tal y como se le puso de presente al demandante en la diligencia de ampliación de hechos y se expuso por los testigos, el tiquete de pago del peaje da cuenta de que el vehículo pasó por dicho punto antes de las 2:10 am, hora a la cual se dio la parada no reportada, razón por la cual, atendiendo a las reglas de la sana crítica es imposible que dicha parada se debiera al peaje, encontrándose entonces sin justificación dicha detención, reiterando que la misma cualesquiera que fuera su causa debió haber sido reportada por el demandante. Ahora bien, las diferentes pruebas allegadas al proceso también dieron cuenta de que la justa causa de terminación del contrato se encontró también fundamentada en que el vehículo que estaba siendo conducido por el demandante en aquel momento reportó una falla en la OBC, específicamente en el GPS del vehículo, la cual no fue debidamente reportada por el demandante.

Radicado: 05360-31-05-001-2023-00129-01

Radicado Interno: P24223

Asunto: Confirma sentencia

A lo largo del proceso se estableció que el demandante sabía que el vehículo contaba con dicho sistema y que incluso cuando finalizó el viaje el 11 de febrero, tal y como lo señaló en la diligencia de ampliación de hechos, evidenció que había una falla con el vehículo que había conducido, no obstante, nunca reportó dicha falla. La testigo LUISA FERNANDA SIERRA dio cuenta de que el dispositivo en el cual se encontró la falla daba distintas señales de que estaba fallando, como la ausencia de pitidos o sonidos, no obstante, el demandante tampoco reportó dichas situaciones pese a que fue claro que el dispositivo estaba funcionando con normalidad al inicio del viaje y durante el recorrido fallo intempestivamente. Todo lo anterior da cuenta de una falta más al seguimiento de los protocolos establecidos para su labor por parte del demandante, cuestión que fue desconocida por el Despacho en su fallo, pues dio por no establecida la justa causa.

Adicionalmente el fallo no tuvo presente que el demandante era reiterativo en el tipo de faltas que se le endilgaban, tal y como se probó en los interrogatorios y en las pruebas documentales allegadas al proceso, los cuales también evidenciaron que el demandante si conocía los protocolos que debía de seguir para su labor pues incluso los recibió por escrito tal y como da cuenta la comunicación recibida por este en 2016, en donde se le socializaba el protocolo de viaje. Al desconocer la importancia de los disciplinarios anteriores adelantadas al demandante por falta de seguimiento a los protocolos establecidos en su labor el Despacho valoró indebidamente la gravedad de la falta cometida por el demandante, pues estos se encontraron debidamente comprobados de acuerdo con la prueba documental allegada al expediente, pues si bien es cierto que en 20 años de servicio estos fueron pocos, lo que sí tuvo que haberse tenido en cuenta es que dichos procedimientos se adelantaron dentro los 4 años anteriores a la terminación, lo cual hace que revistan de más importancia que la asignada por el Despacho e incidan en la calificación de la gravedad de la falta cometida en 2017, la cual justificó la terminación del contrato de trabajo.

Otro aspecto que no tuvo presente el Despacho en su fallo condenatorio es que el Reglamento Interno de Trabajo vigente al momento de la terminación tipificaba como falta grave el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la falta de seguimiento a los protocolos establecidos en manuales. Ello se encontró debidamente acreditado en el acervo probatorio allegado al expediente. Así mismo el juzgado de instancia incurrió en un exceso ritual manifiesto al tomar como no probada la justa causa de terminación del contrato de trabajo del demandante, en razón de que ella no se encontraba consagrada así expresa y literalmente en el RIT. En igual sentido concluyó equivocadamente que la carta de terminación del contrato fue ambigua por cuanto consideró que expresó indebidamente la justa causa, no obstante, dicha conclusión es contraria a la jurisprudencia de las altas cortes respecto de los requisitos de validez de la terminación del contrato de trabajo con justa causa pues los motivos expresados en dicha carta cumplieron con dichos requisitos pues dieron cuenta de las razones de hecho de dicha terminación. Sobre este aspecto resulta relevante traer a colación la sentencia SL 3453 de 2022 en la cual la Corte Suprema de Justicia señaló que “(ii) la parte que termina el nexo laboral con justa causa, debe aducir el motivo justificante, para hacerlo no se exige solemnidad o forma específica, así es dable que se cumpla verbalmente o por escrito, mediante la citación de normas, de hechos o de ambos. En fin, las partes gozan de una libertad formal muy amplia siempre y cuando logren expresar en términos claros e inequívocos la causal o motivo de la terminación.”

De conformidad con lo expuesto el hecho que las normas citadas dentro de la carta de terminación no coincidieran con la literalidad del RIT vigente para aquella época, no es óbice para concluir que la terminación no cumpliera con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico colombiano, pues al momento de terminarse el contrato se le indicaron claramente las razones que justificaban la decisión, citando los hechos y pruebas que servían como fundamento de estas. Aunado a lo anterior, es importante tener en cuenta que el RIT de la compañía vigente para el año 2016 consagraba en su artículo 52 como falta GRAVE y por ende justa causa de terminación del contrato, toda aquella conducta que atente contra los procesos y procedimientos establecidos en la compañía, en especial la violación por parte del colaboradora de las políticas contenidas en manuales, tales como los protocolos durante y después de la ruta y el instructivo de viaje socializado con el demandante en el año 2016. Así

Radicado: 05360-31-05-001-2023-00129-01

Radicado Interno: P24223

Asunto: Confirma sentencia

mismo el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 62, numeral 6 también consagra como justa causa de terminación el incumplimiento de las obligaciones del trabajador, razón por la cual en el presente la justa causa endilgada al demandante también estaba calificada como tal desde la propia Ley pues el contrato de trabajo y los otros si suscritos entre este y mi representada consagraban en cabeza de este la obligación de reportar las paradas y seguir los protocolos de viaje establecidos por la compañía. Es decir que mi representada cumplió adecuadamente con la carga de sustentar los motivos que justificaban la terminación, pues no solo sustentó la misma desde el punto de vista fáctico, sino también desde el aspecto normativo, acudiendo no solo al Reglamento Interno de Trabajo sino también al Código Sustantivo del Trabajo. Ahora bien, otro aspecto respectó del cual el Despacho arrojó a una conclusión equivocada es que, para aquel, mi representada le atribuyó al demandante la culpabilidad respecto de la falla en el GPS.

Dicha conclusión carece de todo sustento pues en ningún momento se señaló al demandante directamente como responsable de tal conducta, tal y como dan cuenta Los testimonios y las pruebas documentales allegadas al proceso, los cuales fueron claros en que la falta endilgada se justificó en la falta de seguimiento a los protocolos establecidos para su labor respecto del no reporte de la parada ni de la falla, conforme a lo expuesto en las líneas precedentes.

Ahora bien, es importante señalar que el Juzgado tomó como rubros salariales, sumas de dinero devengadas por el demandante que no constituyen salario a la luz de lo señalado por el Código Sustantivo del Trabajo y la jurisprudencia de las altas cortes, pues eran rubros que eran pagados por el empleador por mera liberalidad y que en ninguna forma remuneraban el servicio del demandante, razón por la cual dichas sumas no debían de ser tomadas dentro del ingreso base de liquidación empleador para calcular la liquidación del contrato de trabajo del demandante.

La conclusión arrojada por el fallador respecto de los conceptos salariales, conforme a lo expuesto, carece también de todo soporte probatorio pues dicha cuestión le correspondía probarla a la parte demandante, según la carga de la prueba establecida por el Despacho en la fijación del litigio, no obstante, a lo largo del debate la parte demandante no lo acreditó debidamente pues no logró establecer que los rubros no salariales que se la pagaban remuneraban en forma alguna el servicio ni tampoco que el salario variable que devengaba en razón del rubro denominado “viajes ruta nacional” se hubiera calculado indebidamente al momento de pagar su liquidación. Las consideraciones del fallo expresadas por el Juzgado, se refirieron al testimonio de la señora Yanuri.

Duque, no obstante, es importante señalar que respecto de la recepción de dicho testimonio se incurrió en una irregularidad procesal por cuanto el Despacho no tomó el juramento de Ley de dicho testigo, tal y como lo establece el artículo 220 del Código General del Proceso, razón por la cual dicho testimonio no debió de haber sido valorado en la forma realizada por el Despacho. En conclusión, la sentencia proferida por el Juzgado 3 Laboral del Circuito de Medellín el pasado 07 de julio de 2023, es completamente desacertada pues no solo partió de una inadecuada valoración de las pruebas allegadas al proceso al concluir que la terminación del contrato del demandante se dio de manera injusta, sino que también desconoció la jurisprudencia de las Altas Cortes y le dio alcances a las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo que estas no tienen.

CONSIDERACIONES

Problema Jurídico

El problema jurídico a resolver en esta instancia de conformidad con el recurso de apelación interpuesto y el grado jurisdiccional de consulta, serán: (i) Determinar si la señora **Olga Patricia Serna Ocampo** probó la dependencia

económica respecto su hijo fallecido para acceder a la pensión de sobrevivientes y (ii) Determinar si proceden los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y (iii) sí es procedente absolver de costas procesales al fondo administrador.

Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente:

1. **Diego Alejandro Serna Ocampo** fue hijo de la señora Olga Patricia Serna Ocampo, registro de nacimiento aportado.
2. El hijo causante falleció el día **14 de diciembre de 2020**, registro de defunción aportado al proceso.
3. Se encontraba afiliado a Porvenir S.A., y contaba con 171 semanas dentro de los 3 años anteriores a la muerte, dejando causado el derecho. Tal como lo acepta la AFP.
4. El **21 de mayo de 2021**, la madre reclamó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes y la misma fue negada por Porvenir S.A., argumentando que no se demostró la dependencia económica frente al hijo.

Una vez efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a dar respuesta al problema jurídico propuesto:

De la dependencia económica de los padres respecto del hijo fallecido

El artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, establece que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

- d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este.

De la lectura de este artículo resulta claro que los padres cuando pretendan el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por la muerte de un hijo, deben demostrar la dependencia económica del causante para el momento del fallecimiento, aspecto para cuya determinación la Corte Suprema de Justicia ha definido unos criterios, en la sentencia SL-5605-2019, a saber:

“La dependencia deber ser:

Cierta y no presunta:

«Se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres».

Regular y periódica

De manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario;

Significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios

“se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia”.

Además de estas exigencias, el Alto Tribunal siguiendo los lineamientos contenidos en la sentencia C-111 de 2006, ha indicado en sentencias como la reciente SL-3573 de 2021, que, la existencia de un ingreso propio del padre o el apoyo de otro miembro de la familia no son elementos concluyentes que desvirtúen el criterio de necesidad del aporte. De forma literal dijo la Corte:

En este contexto, la jurisprudencia de esta Sala tiene por sentado que el ingreso adicional que tenga un miembro del grupo familiar del causante no logra desvirtuar la dependencia económica, como aquí lo asegura la censura al enrostrar la pensión de salario mínimo que recibe la madre del causante, pues el grado de dependencia económica no depende del ingreso adicional que pueda tener algún miembro del grupo familiar, sino del estado de necesidad que en ellos se crea al faltar el aporte, ayuda o contribución que, de manera subordinada, significativa y constante, recibían del afiliado fallecido, como lo dio por establecido el Tribunal en este caso.

Una vez conocidos los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes y los parámetros fijados por la jurisprudencia para efectos de establecer la dependencia económica, se debe determinar si la misma fue demostrada en el caso sometido a estudio.

De la prueba de la dependencia económica

Se indica por el apoderado de **Porvenir S.A.** que no se demostró por parte de la señora **Olga Patricia Serna Ocampo** la dependencia económica de su hijo, toda vez que contaba con ingresos de su actividad y no era necesaria la ayuda económica que aquel le proporcionaba.

Para probar que dependía de su hijo fallecido, la actora aportó la prueba testimonial de **Diego Guevara Pulgarin, Luz Elena Guerra Gutiérrez y Heidi Adiel Buitrago**, testigos claros y responsivos que afirmaron que era Diego quien veía económicamente por su madre e incluso hermana menor, aportaba \$200.000, para arriendo, aparte compraba el mercado, pagaba el internet, ayudaba para el arreglo de casa que estaban levantando, toda vez que se les cayó.

Para la Sala contrario a lo sostenido por el apoderado apelante, los testigos sí conocían las circunstancias de la familia, toda vez que se trataba del padre biológico del causante, que si bien manifestó que no había apoyado nunca su hijo y no le dio el apellido, posteriormente se habían acercado y mantenían una buena relación con él y la madre, de quien sabía que era una señora humilde que siempre vivió en la vereda, arreglaba uñas de vez en cuando, siendo el hijo quien le proporcionaba una suma mensual considerable, para arriendo, servicios y alimentación, situación que se corroboró como se anotó por las demás testigos que son una vecina de toda la vida y la amiga de la madre desde la infancia.

Respecto del argumento de que la madre y el hijo no vivían bajo el mismo techo todo el tiempo, es importante manifestarle al apoderado que la misma actora lo reconoció en el interrogatorio, donde señaló que Diego laboraba en una mina que quedaba en un corregimiento alejado de la vereda donde vivían, por lo que debía transportarse y quedarse en semana allí, donde le brindaban una habitación, porque debía estar al cuidado de una actividad que se realizaba y se dañaba de no estar supervisada, además que no le cobraban, porque era parte del trabajo, desestimando también el argumento del transporte, toda vez que el causante era propietario de una moto, en la que iba del trabajo a su casa.

Es importante ese apoyo recibido, que sobrepasaba los \$400.000, toda vez que la madre esporádicamente arreglaba uñas en la vereda, por lo cual recibía la suma de \$10.000, siendo lógico que no era un aporte mayor al que su hijo le brindaba.

Llama la atención a la Sala porque el fondo negó la prestación, sí en la misma investigación reconoce que el causante aportaba significativamente en la casa a la madre, veamos,

...SI SE ACREDITÓ el contenido y la veracidad de la solicitud presentada por Olga Patricia Serna Ocampo, una vez analizadas y revisadas cada una de las pruebas aportadas en la presente investigación administrativa.

*De acuerdo a la información verificada, cotejo de documentación, entrevistas y trabajo de campo, se estableció que la señora Olga Patricia Serna Ocampo, dependió económicamente de manera parcial de su hijo el señor Diego Alejandro Serna Ocampo, debido a que para la fecha del deceso, la solicitante se encontraba laborando, **no obstante, sus ingresos eran mínimos y no le alcanzaban para suplir sus gastos, por ende, la dependencia económica de la solicitante se dio hasta el día 14 de diciembre del año 2020, fecha en que fallece el causante...***

Entonces para la Sala dada las condiciones económicas de la familia, considera que existía una sujeción material a los ingresos del causante para la satisfacción de necesidades básicas como los servicios públicos domiciliarios, la alimentación, el arriendo, viéndose afectada la situación económica del grupo familiar y en particular de la madre, quien luego de la muerte de **Diego Alejandro Serna Ocampo** ha debido realizar actividades varias para satisfacer sus necesidades básicas.

En tal sentido no encuentra la Sala razones que la lleven a revocar la decisión de primera instancia en cuanto condenó a **Porvenir S.A.** a reconocer a la señora **Olga Patricia Serna Ocampo** la pensión de sobrevivientes en calidad de madre, motivo por el cual se **confirmará** en este aspecto la decisión de primera instancia.

De la procedencia de la condena al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993

Se solicita por el apoderado de la demandada que no se imponga el pago de intereses moratorios, toda vez que, la negativa del derecho se fundamentó en un actuar de buena fe y legal como resultado la investigación sólida adelantada por un tercero en la que se concluyó la ausencia de dependencia económica.

En lo referente a esta manifestación debe recordar la Sala que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 tienen como propósito resarcir al pensionado por el retardo en el pago de la prestación y en tal sentido tiene carácter objetivo pues se debe tener en cuenta para su imposición el retardo en que incurrió la administradora de pensiones.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia ha explicado que existen circunstancias particulares en las cuales no proceden los intereses, a saber: i) cuando existe disputa entre los beneficiarios, ii) la negativa es producto de la interpretación objetiva de la ley vigente y iii) la pensión es reconocida producto de un cambio jurisprudencial.

Una vez revisado el caso sometido a estudio no se advierte que la administradora se encuentre dentro de alguno de los supuestos enlistados, por el contrario, su negativa se sustenta en que a partir de la conclusión obtenida en su investigación determinó que no existía dependencia económica, tesis que fue desvirtuada en desarrollo del presente proceso, pero sumado a que en la misma investigación reconocen que los ingresos de la madre, no eran suficientes.

En este punto se debe señalar que la negativa de la prestación fundada en el no cumplimiento de requisito de dependencia no es un elemento por el cual se pueda generar una exoneración del pago de intereses, debiendo en este sentido recordar lo enseñado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL-843-2021, en la que al respecto indicó:

Lo adocinado en las providencias que sirven de sustento argumentativo al recurrente, contrario a lo manifestado por éste, nos enseñan, que la buena o mala fe o las circunstancias particulares que condujeron a la discusión del derecho pensional, no pueden ser consideradas para establecer la procedencia de los intereses moratorios de que trata el precepto bajo análisis, tal como se indicó en sentencias como la CSJ, SL 23 sep. 2002, rad. 18512, SL 29 may. 2003, rad. 18789, SL 13 jun. 2012, rad. 42783, entre otras; pues no se concibe como un acto liberatorio de tales réditos, la negativa de la prestación pensional por el simple hecho de existir un motivo de duda sobre el surgimiento del derecho por parte de la administradora pensional, menos aún, fincada en la acreditación fáctica de la dependencia económica, como se esgrime y lo sustenta en el cargo la entidad demandada, o por desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales previamente desarrollados por los jueces competentes frente a la materia en discusión, como se verificó en el presente caso.

De manera que en ningún desafuero incurrió el sentenciador, cuando en aplicación del artículo 141 de la Ley de Seguridad Social, y ante la tardanza en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la condenó por dicho concepto.

Así las cosas, encuentra la Sala que le asistió razón a la juez de primera instancia al imponer el pago de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 por lo que se **confirmará** el fallo apelado.

De las costas procesales

El apoderado del fondo solicita que no sea condenado en costas, toda vez que sus actuaciones fueron de buena fe y con sujeción a la ley.

Sin embargo, la Sala no comparte la apreciación del apoderado, dado que la imposición de costas es un criterio objetivo que no estudia razones de buena o mala fe, además siendo clara su imposición dadas las resultas del proceso y su confirmación.

Costas

Costas en esta instancia a cargo de **Porvenir S.A.** por ser desfavorable el recurso interpuesto de conformidad con lo establecido en el numeral 3) del artículo 365 del CGP. Las agencias en esta instancia a cargo de la entidad demandada y en favor de la demandante se fijan en la suma de **\$1.160.000**

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de primera instancia dictada por la Juez Primera Laboral del Circuito de Itagüí, el día **10 de agosto de 2023**, en el proceso ordinario adelantado por **OLGA PATRICIA SERNA OCAMPO** contra **PORVENIR S.A.**, según las consideraciones de la parte motiva.

Costas en esta instancia a cargo de **Porvenir S.A.** por ser desfavorable el recurso interpuesto de conformidad con lo establecido en el numeral 3) del artículo 365 del CGP. Las agencias en esta instancia a cargo de la entidad demandada y en favor de la demandante se fijan en la suma de **\$1.160.000**

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

Radicado: 05360-31-05-001-2023-00129-01
Radicado Interno: P24223
Asunto: Confirma sentencia

LOS MAGISTRADOS


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA


HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ


HUGO JAVIER SALCEDO OVIEDO